



**TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA**

Santiago de Cali, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte (2020)

<b>MEDIO DE CONTROL:</b>	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO
<b>DEMANDANTE:</b>	MARIA TILSIA FORERO PARDO paukerasociados@hotmail.com
<b>DEMANDADOS:</b>	UNIVERSIDAD DEL VALLE <a href="mailto:Mca-info@mca.com.co">Mca-info@mca.com.co</a> Ministerio Publico <a href="mailto:procjudadm20@procuraduria.gov.co">procjudadm20@procuraduria.gov.co</a>
<b>PROCESO:</b>	76001-23-33-003- <b>2015 00341</b> -00
<b>ASUNTO:</b>	AUTO INTERLOCUTORIO. RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS DECRETO 806 DE 2020

Aprobada en Sala y Acta virtuales de la fecha. Convocatoria N° 39 del 17 de noviembre de 2020

**I. ANTECEDENTES**

Mediante apoderado judicial la señora MARIA TILSIA FORRO PARDO instauró medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO en contra de la UNIVERSIDAD DEL VALLE con el fin de obtener la nulidad de la resolución No. 1858 del 29 de abril de 2014 que reconoció la pensión de la actora sin incluir en ella el promedio del salario del último año de servicios como lo ordena la ley 33 de 1985 y el decreto 1045 de 1978. A título de restablecimiento se reliquide la pensión con todos los factores devengados en el año anterior a adquirir el status de pensionada.

La demanda fue admitida por auto del 2 de mayo de 2019 y notificada personalmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Universidad del Valle y al Ministerio Público y por estado a la parte demandante. Conforme constancia secretarial que obra a folios 224, la entidad demandada UNIVERSIDAD DEL VALLE contestó en término.

El traslado de las excepciones propuestas se surtió el 28 de noviembre de 2019 (Fl. 224 vuelto), con pronunciamiento de la contraparte (Fls.225 a 229).

En auto del 6 de marzo de 2020 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial consagrada en el artículo 180 del CPACA para el 16 de marzo del año 2020 la que no se realizó por la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional y la orden de aislamiento social obligatorio y debido a lo dispuesto en los Acuerdos PCSJA20-11517<sup>1</sup> y PCSJA20-11518<sup>2</sup> del Consejo Superior de la Judicatura.

<sup>1</sup>“Por el cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública”

Artículo 1. Suspender los términos judiciales en todo el país a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona privada de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente. Igualmente se exceptúa el trámite de acciones de tutela.

<sup>2</sup> “Por el cual se complementan las medidas transitorias de salubridad pública adoptadas mediante el Acuerdo 11517 de 2020”

Dispuso que los funcionarios y empleados judiciales trabajen desde sus casas, por lo que se hace necesario adelantar todas las actuaciones que se deriven de esta providencia a través de los medios electrónicos, como lo contempla el artículo 186 del CPACA.

## II. CONSIDERACIONES

Mediante decretos 417 del 17 de marzo y 637 del 6 de mayo de 2020 el Gobierno Nacional dispuso “*el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional*”, con ocasión de la pandemia declarada por la OMS por motivo de la Covid-19, razón por la que el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 “*Por el cual se complementan las medidas transitorias de salubridad pública adoptadas mediante el Acuerdo 11517 de 2020*” dispuso que los funcionarios y empleados judiciales trabajen desde sus casas, por lo que se hace necesario adelantar todas las actuaciones que se deriven de esta providencia a través de los medios electrónicos, como lo contempla el artículo 186 del CPACA.

Por Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020 se levantó la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura entre el 16 de marzo y el 31 de junio de 2020<sup>3</sup>.

De otro lado, el Gobierno Nacional expidió el 4 de junio de 2020, el decreto legislativo No 806<sup>4</sup>, donde, entre otras consideraciones, señaló:

*“(…) Que igualmente, es importante crear disposiciones que agilicen el trámite de los procesos judiciales y permitan la participación de todos los sujetos procesales, contrarrestando la congestión judicial que naturalmente incrementó la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura con fundamento en la emergencia sanitaria.*

*Que, por lo anterior, es necesario **crear un marco normativo que se compadezca con la situación actual que vive el mundo y especialmente Colombia, que perdure durante el estado de emergencia sanitaria**, y que establezca un término de transición mientras se logra la completa normalidad y aplicación de las normas ordinarias.*

*Que este marco normativo **procurará que por regla general las actuaciones judiciales se tramiten a través de medios virtuales y excepcionalmente de manera presencial**. Por lo que se debe entender que las disposiciones de este decreto complementan las normas procesales vigentes, las cuales seguirán siendo aplicables a las actuaciones no reguladas en este decreto.*

*(…)*

***Que estas medidas, se adoptarán en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición de este decreto (…)**.  
(Resalta la Sala).*

En esta secuencia, el artículo 12 dispone:

<sup>3</sup> Por Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526 y PCSJA20-11529 de marzo de 2020; PCSJA20-11532, PCSJA20-11546 de abril de 2020; y PCSJA11547, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11549 de mayo de 2020 dispuso suspender los términos de las actuaciones judiciales salvo algunas excepciones.

<sup>4</sup> Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

**“Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.** De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.

*Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.*

*Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.*

*La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez, subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable”*

En este orden, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 806 de 2020 analizado en precedencia, esta Sala de Decisión se pronunciará sobre las excepciones previas propuestas.

### **Caso concreto:**

La parte demandada Universidad del Valle propuso las excepciones que denominó: *“ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia de acto demandable, cosa juzgada, aplicación de la sentencia de unificación proferida por la sala plena del consejo de estado el 28 de agosto de 2018 sobre factores salariales, prescripción e innominada”*.

Frente a las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda y cosa juzgada, señaló el demandado que la resolución 1858 del 29 de abril de 2014 que reconoció la pensión de jubilación al señor NOE SANTIAGO CRUZ APONTE (q.e.p.d) de quien deviene el derecho de la demandante MARIA TILSIA FORERO PARDO fue expedida en cumplimiento de un fallo judicial y por ello no es susceptible de demandarse por tratarse de un acto de cumplimiento o ejecución de un mandato judicial, además de ya haberse definido judicialmente la controversia.

Frente a esta excepción el demandante indicó que la demanda, contiene hechos nuevos que no configuran la *causa petendi* objeto de la antigua demanda y estos hechos no fueron definidos mediante las sentencias dictadas tanto el 31 de mayo de 2011 por el Juzgado Primero

Administrativo de Cali y el 8 de noviembre de 2011 por el Tribunal Administrativo del Valle.

La Sala advierte que mediante sentencias dictadas el 31 de mayo de 2011 por el Juzgado Primero Administrativo de Cali y confirmada el 8 de noviembre de 2011 por el Tribunal Administrativo del Valle se declaró la nulidad del acto administrativo (resolución 1779 del 25 de noviembre de 1998) por el cual la Universidad del Valle reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a nombre del señor NOE SANTIAGO CRUZ APONTE al encontrar que no había sido reconocida aplicando en su totalidad el régimen de la Ley 33 de 1985, como correspondía.

El Tribunal Administrativo en la parte resolutive de la sentencia del 8 de noviembre de 2011 indicó:

*“ORDENAR a la UNIVERSIDAD DEL VALLE la expedición de un nuevo acto administrativo, donde se reliquide la pensión reconocida al señor NOEL SANTIAGO CRUZ APONTE con el equivalente al 75% de los salarios devengados en el último año de servicios, con inclusión de los factores salariales que contemplan las leyes 33 y 62 de 1985; efectiva a partir del 28 de enero de 1999, fecha en que efectivamente adquirió el status de pensionado”.*

Dando cumplimiento a las disposiciones judiciales la Universidad del Valle emitió la resolución No. 1858 del 29 de abril de 2014 que reconoció y ordenó el pago de la pensión aplicando el régimen de la Ley 33 de 1985, sin embargo, en su parte considerativa indicó:

*“Que la mesada pensional se reliquidará de acuerdo con la decisión proferida en la providencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, aplicando el 75% del promedio de los factores establecidos por las leyes 33 y 62 de 1985 **y el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994**, los cuales constituyen la base para los aportes a la seguridad social en pensiones y fueron devengados durante el último año de servicios prestados, comprendidos entre el 1 de enero de 1997 al 30 de diciembre de 1997”* Subrayas del despacho.

En la demanda que ahora se conoce, la parte actora insiste en que los factores a tener en cuenta para definir la liquidación de la pensión deben ser aquellos devengados en el último año de servicios conforme las leyes 33 y 62 del 1985 y el decreto 1045 de 1978, pues no se puede aplicar el decreto 1158 de 1994 al presente asunto por cuanto en los fallos citados, la jurisdicción definió que el régimen aplicable era el de la ley 33 de 1985 en su totalidad sin lugar a escindir.

Esta situación sin lugar a dudas, constituye un hecho nuevo a los consignados en la parte motiva de las providencias judiciales primigenias por lo que su naturaleza no responde a la de un acto de ejecución y en ese orden es susceptible de control ante esta jurisdicción. Por idénticas razones no se configura en el presente asunto la identidad de *causa petendi*, ni de objeto entre el actual proceso y el adelantado ante el Juzgado Primero Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle.

Respecto de las excepciones que la Universidad del Valle denominó: *“aplicación de la sentencia de unificación proferida pro la sala plena del consejo de estado el 28 de agosto de 2018 sobre factores salariales, prescripción e innominada”* se observa que son aspectos que solo pueden ser definidos cuando se estudie el fondo del asunto y no constituyen excepción sino argumentos de defensa de la entidad.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: DEJAR** sin efectos el auto proferido el 6 de marzo de 2020, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

**SEGUNDO: DECLARAR** no probadas las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda y cosa juzgada propuestas por la Universidad del Valle.

**TERCERO: NOTIFICAR** la presente providencia por estado electrónico, en atención a lo dispuesto por el artículo 9° del Decreto 806 de 2020.

**CUARTO:** De conformidad con el artículo 2 del Decreto 806, el canal oficial de comunicación e información para recibir memoriales es el correo electrónico: [rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**QUINTO:** Ejecutoriada la presente providencia, ingrese nuevamente el expediente al despacho para lo pertinente.

**Providencia discutida y aprobada en Sala Virtual de la fecha, según consta en acta que se entrega a la Secretaría de la Corporación por medios virtuales, atendiendo las circunstancias de salubridad pública que se presentan en el país a raíz del COVID-19.**

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA  
Magistrada

  
ANA MARGOTH CHAMORRO BENAIDES  
Magistrada

  
VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ  
Magistrado